## REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



## JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN EXTINCIÓN DE DOMINIO DE ANTIQUIA

Medellín, trece (13) de junio de dos mil veintitrés (2023)

- ·	05000 24 20 002 2022 00020 00		
Radicado	05000 31 20 002 2023-00030 00		
Radicado Fiscalía	2021-00070 Fiscalía 35 E.D.		
Rauicauo Fiscalia	2021-000/0 Piscana 33 E.D.		
Proceso	Control de legalidad sobre medidas cautelares		
Radicado del proceso	05-000-31-20-001-2023-00017-00		
principal en juzgamiento	Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado		
	en Extinción de Dominio de Antioquia		
Solicitante del control	Jorge Alcónides Úsuga Carmona		
Identificación de los bienes	Matrícula inmobiliaria:		
cautelados respecto de los	• 01N-101472		
cuales se solicita el control	Automotor de placas:		
	• DHQ-553		
Decisión	Declara la <u>ilegalidad</u> de las medidas cautelares		
	extraordinarias vigentes sobre la M.I.01N-101472.		
	_		
	Declara la <u>legalidad</u> de las medidas cautelares		
	vigentes sobre las placas DHQ-553.		
Auto interlocutorio nro.	023		

#### 1. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO.

Procede el Despacho a resolver la solicitud de control de legalidad¹ deprecada en contra de las medidas cautelares decretadas por la resolución de fecha 23-03-2022, mediante la cual la Fiscalía 35 de la Dirección Especializada en Extinción del Derecho de Dominio –DEDD- resolvió imponer medidas cautelares sobre el inmueble identificado con M.I. 01N-101472, y sobre el automotor identificado por placas DHQ-553, entre otros, por haber considerado que dentro de la investigación, identificada con radicado 11001-60-99068-

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archivo "005SolicitudControlLegalidad" – tamaño 6.13MB.

2021-00070 E.D., obran suficientes elementos de juicio para determinar un vínculo probable entre los bienes cautelados y una causal de extinción de dominio.

### 2. RESUMEN FÁCTICO Y PROCESAL.

#### 2.1. Resumen de los hechos.

Refiere la Fiscalía que la presente investigación tuvo origen en el marco de la estrategia institucional del Gobierno Nacional en contra del narcotráfico y las finanzas criminales de las organizaciones delincuenciales, donde se adelanta una línea investigativa que busca desarticular la cadena financiera liderada por alias "Muela de Grillo", ciudadano que presuntamente lidera una estructura encargada del lavado de activos y vinculada al GAO Clan del Golfo.

Se explica que la noticia criminal para la investigación de la actividad de lavados de activos, surge por compulsa de copias que realiza la Fiscalía 61 Delegada Contra Organizaciones Criminales, de una investigación adelantada en contra del Clan del Golfo y la Oficina de Envigado. Ello por estimarse demostrada "la existencia de una organización delincuencial dedicada al lavado de activos y al enriquecimiento ilícito, la cual sería liderada por Miguel Ángel Úsuga Fernández, exintegrante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y conformada por los miembros de su núcleo familiar cercano y colaboradores quienes siguiendo sus instrucciones adelantan una serie de actividades con la finalidad de dar apariencia de legalidad a actividades ilícitas", mediante la constitución de sociedades comerciales para realizar los movimientos de elevadas sumas de dinero y también mediante la utilización de terceros para ocultar las propiedades.

Razones que se soportan en las interceptaciones de comunicaciones realizadas dentro de la investigación penal, y por la "falta de razonabilidad entre los ingresos declarados y los percibidos que decantan en incrementos por justificar".

## 2.2. Actuación procesal.

Formulada la petición de control de legalidad por el doctor Yoiber René Castellanos Torres ante la Fiscalía 35 de la Dirección Especializada en Extinción de Derecho de Dominio –DEEDD-, en la fecha 05-10-2022 ésta remitió la misma ante los Juzgados del Circuito Especializado en Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Bogotá<sup>2</sup> y, habiéndose sometido a reparto en la fecha 21-10-2022, la solicitud de control de legalidad quedó asignada para trámite del Juzgado Primero de aquel Distrito<sup>3</sup>.

Así que, mediante auto de sustanciación nro.281 del 30-11-2022, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Bogotá decide avocar conocimiento y ordena correr el traslado de que trata el artículo 113 del Código de Extinción de Dominio<sup>4</sup>. Encontrándose que el término corrió en silencio los días dieciséis (16) y diecinueve (19) de diciembre de 2022, y once (11), doce (12) y trece (13) de enero de 2023<sup>5</sup>.

Después de ingresar el expediente a aquel Despacho, en la fecha 27-04-2023 se emite el auto interlocutorio nro.034, por medio del cual aquel Juzgado considera que no goza de competencia para resolver el control de legalidad<sup>6</sup>, argumentando que como los dos bienes sobre cuyas cautelas vigentes recae el control de legalidad se establecen en la ciudad de Medellín, la competencia pertenece por tanto a los juzgados de éste Distrito Judicial de Antioquia, en aplicación directa del inciso 1° del artículo 35 y del artículo 111 del Código de Extinción de Dominio. Así que mediante Oficio núm.1322-J1ED de la misma fecha, fue remitido el presente proceso a estos Juzgados<sup>7</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Páginas 2 y 3 del archivo "001CarátulaEInforme" – tamaño 2.27MB.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Página 27 del archivo "001CarátulaEInforme" – tamaño 2.27MB.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Archivo "002AvocaControlLegalidad" – tamaño 18.8KB.

 $<sup>^{\</sup>rm 5}$  Archivo "006TrasladoeInforme" – tamaño 63.6KB.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Archivo "004RemiteCompetencia" – tamaño 240KB.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Archivo "003OficioRemisorio" – tamaño 76.4KB.

Ese mismo día 27-04-2023, fue sometido a reparto el control de legalidad remitido por competencia desde Bogotá, entre los Juzgados del Circuito Especializado en Extinción de Domino del Distrito Judicial Antioquia, siendo asignado para trámite a este Juzgado Segundo, según consta en el acta de reparto con secuencia nro.488. Una vez radicado el proceso dentro de los sistemas, estando a Despacho y en vistas del trámite dado a la solicitud de control de legalidad, antes de asumir competencia, este Despacho Judicial decide verificar la información del proceso para aplicar una sub-regla necesaria para determinar la competencia, por lo cual mediante auto de sustanciación nro.160 del 16-05-2023, se ordena requerir por aquel dato a la Fiscalía 35 DEEDD<sup>9</sup>, y en la fecha 18-05-2023 se recibe la correspondiente respuesta<sup>10</sup>.

Verificada la competencia, ahora, entrará este Despacho Judicial a resolver de fondo la solicitud de control de legalidad deprecada por el doctor Yoiber René Castellanos Torres.

# 2.3. Identificación de los bienes cautelados y el objeto del presente control de legalidad.

En la solicitud de control de legalidad se identificaron los siguientes bienes, cuales fueron cautelados por la Fiscalía 35 DEEDD mediante la resolución de medidas cautelares de fecha 23-03-2022. Se observa también, que las siguientes fueron las medidas cautelares efectivamente practicadas y que serán objeto del presente control de legalidad.



<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Archivo "002ActaRepartoSecuencia48" – tamaño 176KB.

4

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Archivo "005AutoRequiereAFiscalia35DEEDD" – tamaño 525KB.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Archivo "007RespuestaRequerimientoF35ED" – tamaño 383KB.

Tipo de bien	PREDIO URBANO <sup>11</sup>		
Matrícula inmobiliaria	01N-101472 DEL CÍRCULO REGISTRAL DE MEDELLÍN ZONA NORTE		
Número predial	05 001 01 04 11 14 0041 0013 0 00 00 000012		
Dirección o ubicación	CARRERA 78B #57 – 19 URB. LOS GUAYACANES DEL BARRIO LOS COLORES, MEDELLÍN – ANT.		
Propietario inscrito	JORGE ALCÓNIDES ÚSUGA CARMONA CC.3.486.580		
Porcentajes de propiedad	100%		
Limitaciones o gravámenes a la propiedad inscritos	a EMBARGO EJECUTIVO CON ACCIÓN PERSONAL. ORDENADO POR EL JUZGADO 04 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN. RADICADO 2020-00681		
Titular de la limitación	JUAN CAMILO ESCOBAR VELÁSQUEZ CC.71.268.778		
Medidas cautelares materializadas	<ul> <li>a) Suspensión del poder dispositivo<sup>13</sup></li> <li>b) Embargo<sup>14</sup></li> <li>c) Secuestro<sup>15</sup></li> </ul>		

BIEN NRO. 02					
Tipo de bien	VEHÍCULO CLASE CAMIONETA <sup>16</sup>				
Placas	DHQ-553	Marca	ТОУОТА		
Serie	MR0FZ29GXC1629857	Línea	HILUX		
Chasis	MR0FZ29GXC1629857	Modelo	2012		
Motor	1KD5432295	Secretaría de Tránsito	Secretaría de Movilidad de Medellín <sup>17</sup>		

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Para conocer la cabida y linderos del inmueble, remitirse al certificado de libertad y tradición (artículo 83 del Código General del Proceso). El cual se puede encontrar aportado junto con la solicitud de control de legalidad.

 $<sup>^{12}</sup>$  Se puede encontrar la ficha catastral aportada junto con la solicitud de control de legalidad.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Anotación nro.016 del certificado de libertad y tradición.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Anotación nro.015 del certificado de libertad y tradición.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Acta de secuestro de inmueble visible a páginas 227 a 233 del archivo "002CuadernoSegundo" – tamaño 21.8MB.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Especificaciones técnicas y guarismos se pueden consultar en el certificado del Registro Único Nacional de Tránsito –RUNT-, que fue aportado junto con la solicitud de control de legalidad.

 $<sup>^{17}</sup>$  Certificado de libertad y tradición se puede encontrar aportado junto con la solicitud de control de legalidad.

Propietario inscrito	JORGE ALCÓNIDES ÚSUGA CARMONA CC.3.486.580
Limitaciones o gravámenes a la propiedad inscritos	Ninguna
Medidas cautelares materializadas	a) Embargo <sup>18</sup>

### 3. INTERVENCIONES.

No realizaron uso del traslado previsto por el artículo 113 del Código de Extinción de Dominio ni el Despacho Fiscal, ni ninguno de los intervinientes.

### 3.1. Causales invocadas y argumentación por el incidentista.

El doctor Yoiber René Castellanos Torres, dedica un capítulo dividido en trece numerales para exhibir algunos antecedentes sobre la forma en que el señor Jorge Alcónides Úsuga Carmona adquirió el automotor y el inmueble sobre los cuales recayeron las medidas cautelares, igualmente realiza un corto resumen con algunas de las actividades investigativas realizadas por la Fiscalía 35 Especializada en Extinción de Dominio.

Frente a la causal primera: el incidentista se sirve refutar al Despacho Fiscal en lo relativo a la situación de su representado como persona cotizante al Sistema General en Seguridad Social, también aduce un nivel de estudios y una experiencia laboral por encima de la aducida por el Despacho Fiscal; circunstancias que trae a colación, porque sus afirmaciones en contrario fueron los argumentos de los cuales se sirvió la Fiscalía para motivar la imposición de las medidas cautelares sobre el bien inmueble. De ello, que tacha la labor investigativa de la Fiscalía como insuficiente para lograr acreditar el vínculo

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Limitación vigente inscrita en el certificado de libertad y tradición del automotor.

probable "entre los posibles titulares de derechos sobre los bienes y las causales de extinción de dominio".

Argumenta el incidentista, que es contradictorio invocar sobre un mismo bien una causal extintiva por origen ilícito con la causal de mezcla, porque aquello que está realizando el Despacho Fiscal, es decir, primero, que el bien tiene un origen ilícito, y luego, desdecirse para argumentar que el bien tiene un origen lícito, pero que se debe declarar la extinción del derecho de dominio porque fue mezclado material o jurídicamente con otros bienes de ilícita procedencia.

Señala el doctor Castellanos Torres que, según el historial de tradición del inmueble, el señor Jorge Alcónides Úsuga Carmona adquirió el derecho de dominio mediante compraventa a otras dos personas naturales, quienes a su vez adquirieron por sucesión, y dentro de la investigación de la Fiscalía tanto los vendedores como el comprador se deducen ajenos a las actividades ilícitas del principal investigado, señor Miguel Ángel Úsuga Fernández.

En lo que respecta al bien mueble, señala que "la Fiscalía no ha podido demostrar con elementos mínimos de juicio que vinculen a mi representado con actividades ilícitas (...)". Tanto, que ni siquiera ha sido objetivo de investigación.

También hace referencia el abogado a que "tampoco recolectó [la Fiscalía] pruebas que permitieran inferir razonablemente la ausencia de buena fe exenta de culpa sobre la adquisición de los bienes". Y que el señor Úsuga Carmona tenía la capacidad económica y la liquidez para comprar el vehículo.

<u>Frente a la causal segunda</u>: se remite a lo anteriormente expuesto. Pero también señala que no hay congruencia temporal entre la fecha de adquisición del inmueble (23-05-2018), y el desempeño de las actividades ilícitas.

Indica que es suficiente mantener la suspensión del poder dispositivo para garantizar los fines de la administración de justicia, mientras que no considera adecuadas las medidas extraordinarias al no poderse inferir el vínculo probable de los bienes con las causales extintivas del dominio. De cara al juicio de necesidad, que expuso la Fiscalía para imponer las medidas cautelares sobre el

automotor, quiere denotar que no está dirigida al cumplimiento de ninguno de los fines de las medidas cautelares.

Va terminando su solicitud de control de legalidad, señalando algunos actos de cuidado y diligencia que, respecto de los bienes, ha ejercido el señor Jorge Alcónides Úsuga Carmona.

#### 4. CONSIDERACIONES.

## 4.1. Competencia.

Este Despacho Judicial es competente para resolver en primera instancia de la solicitud de control de legalidad, toda vez que los bienes involucrados dentro del proceso de extinción de dominio, identificado con el radicado 2021-00070 E.D. de la Fiscalía 35 DEEDD, se encuentran ubicados dentro de la jurisdicción del Distrito Judicial de Antioquia.

Ello aplicando las reglas de competencia del artículo 39, numeral 2, del Código de Extinción de Dominio, y el Acuerdo No. PSAA16-10517 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

## 4.2. Cuestión procesal previa.

De conformidad con la sustitución de poder suscrita por el doctor Pedro Wilfred Romero Escamilla<sup>19</sup>, quien se identifica con la cédula de ciudadanía nro.5.772.142 y tarjeta profesional nro.372.300 del C S de J, en favor del doctor Yoiber René Castellanos Torres<sup>20</sup>, es del caso reconocerle personería para actuar a éste último, quien se identifica con cédula de ciudadanía

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> El poder sustituido se puede encontrar en las páginas 24 a 26 del archivo "005SolicitudControlLegalidad" – tamaño 6.13MB.

 $<sup>^{20}</sup>$  La sustitución se encuentra visible en las páginas 27 a 29 del archivo "005SolicitudControlLegalidad" – tamaño 6.13MB.

nro.1.053.336.757 y tarjeta profesional nro.293.768 del C S de J, como apoderado del señor Jorge Alcónides Úsuga Carmona, identificado con cédula de ciudadanía nro.3.486.580; en los términos conferidos.

#### 4.3. Resolución del asunto.

Con base en lo expuesto, el Despacho analizará la solicitud presentada por la parte reclamante, a fin de verificar si se dan los presupuestos para acceder a su pretensión, o si por el contrario debe ser legalizada las medidas cautelares ordenada por el ente fiscal.

Para ello, resulta pertinente señalar la normatividad que rige la presente actuación extintiva.

Así pues, en primer lugar, se debe indicar que la Ley 1708 de 2014- Estatuto de Extinción de Dominio, prevé varias modalidades de control de legalidad en lo que se refiere al proceso de extinción del derecho de dominio.

Los de más ocurrencia son el control de legalidad a las medidas cautelares; y el control de legalidad sobre el archivo.

La primera clase de control es el propuesto en esta oportunidad, por lo que es necesario mencionar como fue regulado en el Código de Extinción de Dominio:

#### (...) "Artículo 111. Control de legalidad a las medidas cautelares.

Las medidas cautelares proferidas por el Fiscal General de la Nación o su delegado no serán susceptibles de los recursos de reposición ni apelación. Sin embargo, previa solicitud motivada del afectado, del Ministerio Público o del Ministerio de Justicia y del Derecho, estas decisiones podrán ser sometidas a un control de legalidad posterior ante los jueces de extinción de dominio competentes.

Cuando sea necesario tomar una medida cautelar en la etapa de juzgamiento, el Fiscal General de la Nación o su delegado lo solicitará al juez competente, quien decidirá con arreglo a este Código.

#### Artículo 112. Finalidad y alcance del control de legalidad a las medidas cautelares.

El control de legalidad tendrá como finalidad revisar la legalidad formal y material de la medida cautelar, y el juez competente solo declarará la ilegalidad de la misma cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- 1. Cuando no existan los elementos mínimos de juicio suficientes para considerar que probablemente los bienes afectados con la medida tengan vínculo con alguna causal de extinción de dominio.
- 2. Cuando la materialización de la medida cautelar no se muestre como necesaria, razonable y proporcional para el cumplimiento de sus fines.
- 3. Cuando la decisión de imponer la medida cautelar no haya sido motivada.
- 4. Cuando la decisión de imponer la medida cautelar esté fundamentada en pruebas ilícitamente obtenidas.

#### Artículo 113. Procedimiento para el control de legalidad a las medidas cautelares.

El afectado que solicite el control de legalidad debe señalar claramente los hechos en que se funda y demostrar que concurre objetivamente alguna de las circunstancias relacionadas en el artículo anterior.

La presentación de la solicitud y su trámite no suspenden el cumplimiento de la providencia ni el curso de la actuación procesal.

Formulada la petición ante el Fiscal General de la Nación o su delegado, este remitirá copia de la carpeta al juez competente que por reparto corresponda.

Si el juez encontrare infundada la solicitud la desechará de plano. En caso contrario, la admitirá y surtirá traslado común a los demás sujetos procesales por el término de cinco (5) días.

Vencido el término anterior, el juez decidirá dentro de los cinco (5) días siguientes. Las decisiones que tome el juez en desarrollo del presente artículo, serán susceptibles del recurso de apelación." (Subrayado fuera del texto) (...)

La finalidad por excelencia de las medidas cautelares, no es otra que garantizar que el bien objeto de la acción no sea ocultado, gravado, negociado, distraído, transferido o que pueda sufrir deterioro, extravío o destrucción, o para cesar su uso o destinación ilícita, conforme lo prevé el artículo 87 del estatuto de Extinción de Dominio, en aras de evitar así que en caso de proferirse una sentencia que declare la extinción de dominio sobre determinado bien, esta carezca de efectividad por carencia del objeto.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la propiedad privada es objeto de protección Constitucional, conforme al artículo 58<sup>21</sup> de la Carta Política, y también a través de instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en su artículo 17<sup>22</sup>, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 21<sup>23</sup>.

El desarrollo jurisprudencial ha establecido que la propiedad es un derecho fundamental cuando tiene una relación directa con la dignidad humana<sup>24</sup>, lo que determina fortalecer su ámbito de protección, ya que los derechos fundamentales son un "parámetro de legitimidad del sistema político y jurídico<sup>25</sup>, por lo que deviene que <u>la propiedad no puede ser objeto de restricciones irrazonables o desproporcionadas</u> que desconozcan el interés del propietario de obtener una utilidad económica sobre sus bienes y contar con las condiciones mínimas de goce y disposición.

Pese a lo anterior, es claro que la propiedad no es en realidad un derecho absoluto, pues el Estado puede imponer limitaciones, como ocurre en los procesos de extinción de dominio, por razón de haber sido adquiridos con dineros originados en actividades ilícitas o ser destinados al delito, siendo entonces las medidas cautelares el instrumento para evitar que los bienes objeto

### La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> ... 17. Siendo inviolable y sagrado el derecho de propiedad, nadie podrá ser privado de él, excepto cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exige de manera evidente, y a la condición de una indemnización previa y justa.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada

<sup>1.</sup> Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

<sup>2.</sup> Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.

<sup>3.</sup> Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la lev.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Sentencia T-454/12 Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> URBANO MARTÍNEZ José Joaquín, La Nueva Estructura Probatoria del Proceso Penal. Ediciones Nueva Jurídica, 2 edición. 2013 pg.103.

del proceso puedan ser ocultados, distraídos, negociados o transferidos o puedan sufrir deterioro, extravío o destrucción, o también que pueda persistir su indebida destinación.

La vigencia de la Ley 1708 de 2014 con sus modificaciones y la regulación atinente a las medidas cautelares prevista en sus artículos 87 y 88 instruye que las mismas tienen carácter preventivo y no sancionatorio, porque protegen el derecho a la propiedad, garantizan el principio de publicidad y limitan el tránsito de bienes afectados en el comercio de manera provisional, mientras se adopta una decisión de fondo.

Para que su decreto (el de las medidas) resulte procedente, debe perseguir evitar que los bienes cuestionados sufran variación en su titularidad, deterioro, extravío o destrucción, o cesar el uso o destinación ilícita; y en cada caso se estudiará de cara al control de legalidad la causal invocada y su legalidad misma, para conjurar o no las restricciones, resaltando sus características del ruego, como son su posterioridad al de la resolución de la medida, su ruego, el acatamiento de las reglas y técnicas y su escrituraria; reseñaron los tintes de publicidad y respeto por los derechos de los afectados que deben primar a partir de la materialización de las medidas cautelares.

De manera previa resulta de importancia resaltar y dejar por sentado a todas las partes intervinientes en esta causa las características de la acción de extinción de dominio y para ello es bueno traer los criterios que la Corte Constitucional indicó en Sentencia C- 958 de 2014, a saber:

- a. La extinción de dominio es una acción constitucional consagrada para permitir, no obstante, la prohibición de la confiscación, declarar la pérdida de la propiedad de bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social,
- b. Se trata de una acción pública que se ejerce por y a favor de/ Estado, como un mecanismo para disuadir la adquisición de bienes de origen ilícito, luchar contra la corrupción creciente y enfrentar la delincuencia organizada.

- c. La extinción de dominio constituye una acción judicial mediante la cual se declara la titularidad a favor del Estado de los bienes a que se refiere la Ley 1708 de 2014 sin contraprestación no compensación de naturaleza alguna.
- d. Constituye una acción autónoma y directa que se origina en la adquisición de bienes derivados de una actividad ilícita o con grave deterioro de la moral social, que se ejerce independiente de cualquier declaración de responsabilidad penal.
- e. La extinción de dominio es esencialmente una acción patrimonial que implica la pérdida de la titularidad de bienes, en los casos previstos por el artículo 34 de la Constitución y las causales precisadas en la ley.
- f. Por las particularidades que la distinguen la acción de extinción de dominio se sujeta a un procedimiento especial, que rige por principios y reglas sustanciales y procesales propias,

Si bien la acción de extinción de dominio ha tenido un claro rasgo penal, a partir de conductas tipificadas en la ley, el legislador está habilitado para desarrollar los hechos que configuran cada una de las tres causales, mediante nuevas normas que desarrollen aquellas acciones para extinguir el derecho de dominio por conductas que atentan gravemente contra la moral social o causan un grave perjuicio al Tesoro Público, independientemente de su adecuación o no a un tipo penal. "<sup>26</sup>

*(...)* 

Sobre el punto se dijo, en decisión colegiada del H. Tribunal de Extinción de dominio<sup>27</sup> que:

(...) ... si con el juicio penal se pone en marcha la facultad del Estado para que, a través de la Rama Judicial del Poder Público, declare o no la responsabilidad de una persona, luego de surtir un proceso reglado, de tal forma que en el evento de ser encontrado responsable del cargo, sufrirá la imposición de una aflicción, ya sea privativa la libertad o de carácter pecuniario, lo que se conoce genéricamente como el ius puniendi; tal derecho de penar difiere de la acción orientada a perseguir la riqueza deshonesta o utilizada en actividades que deterioran la moral social, o que se mezcle con ella; de ahí que en el expediente de la especie, que se encuentra apenas en sus albores, no se persiga el comportamiento criminal de algún ciudadano; por

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Sobre el punto vale recordar que el artículo 17 del Código de extinción de Dominio, prevé: "NATURALEZA DE LA ACCIÓN. La acción de extinción de dominio de que trata la presente ley es de naturaleza constitucional, pública, jurisdiccional, directa, de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido." (Subraya la Sala).

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM SALAMANCA DAZA Radicado: Control de legalidad medidas cautelares 050003120001201800022 01 Procedencia: Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia Afectados: Olga Liliana Moreno Romero Decisión: Confirma Acta. 109 Bogotá D. C. veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)

el contrario, se encuentra en tela de juicio el origen, uso o destinación de un bien que contraríe a la Constitución, y por ello se persigue esté en cabeza de quien esté.

La acción también difiere de los cometidos del derecho civil, porque lo que se disputa en el proceso de extinción es la titularidad de las prerrogativas reales de una persona sobre una cosa, con un valor cuantificable, como consecuencia de la probada existencia de una causal contemplada en el CED, por ejemplo, por la presunta utilización espuria; entre tanto, la acción real en el proceso civil, dota a una parte de la reipersecutoriedad por medio del cual el particular busca la restitución de su derecho real, como ocurre en la acciones hipotecarias, reivindicatorias o posesorias.

Lo anterior es suficiente para aclarar que el elemento a dilucidar, difiere en los ámbitos penal, civil y de extinción de dominio, y de allí que este último cuente con un estatuto especialísimo, y aunque su apertura puede tener o no su fuente en investigaciones de orden punitivo, no busca una declaración de responsabilidad, como tampoco enfrenta a dos particulares en pro del resarcimiento de una obligación o derecho de orden civil, por eso se dice que el efecto sobre patrimonio difiere el ramo de esta especialidad de la jurisdicción.

Es que, el ius persequendi con el que la Constitución y la ley dotan a la Fiscalía, le permite al ente investigador, formular su pretensión consistente en la solicitud de la declaratoria judicial de la extinción del dominio a favor del Estado, siempre y cuando los bienes de los que se trate, estén inmersos en alguna de las causas previstas en el canon 16 de la Ley 1708 de 2014, porque la acción es de contenido patrimonial.

Acatando, entonces, las previsiones contenidas en los artículos 34, 58, 250 y siguientes de la Carta, amén de los artículos 29, 34, 158, 159 de la Ley 1708 de 2014, con las modificaciones de la Ley 1849 de 2017, la Fiscalía General de la Nación tiene la facultad para dar inicio a las exploraciones en contra de los bienes respecto de los cuales esté por determinarse si se encuentran inmersos en alguna de los eventos del CED; de cara a ellos, al ente en cuestión le compete "dirigir y coordinar técnica, operativa y jurídicamente las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.

(...)

De otra parte, como se dijo en líneas atrás, La naturaleza de las medidas cautelares en el proceso de Extinción de Dominio tiene como propósito, intensión y finalidad garantizar el cumplimiento de los resultados del

**trámite de proceso**, y en términos del artículo 87<sup>28</sup> del Código de Extinción de Dominio, es evitar que los bienes que se cuestionan puedan ser ocultados, negociados, grabados, distraídos, transferidos, o puedan sufrir deterioro, extravió o destrucción; o con el fin de cesar su uso o destinación ilícita. En todo caso se deberá salvaguardar los derechos de terceros de buena fe exenta de culpa.

Igualmente, se debe tener en cuenta que en el trámite de Extinción de Dominio se debe respetar los derechos del afectado, en este caso, el propietario o titular del bien en el sentido de establecer de cara a la causal que se le reprocha primeramente sí el bien adquirido proviene de fuente licita o no, o está destinado a actividad ilícita, o hace parte de ella, segundo, certificar a través de los medios idóneos que los dineros con los que adquiere o adquirió dicho bien son producto de una actividad lícita, o que su destinación es lícita, y tercero si tuvo la precaución y diligencia de velar porque la propiedad adquirida cumpla con la función social y ecológica, que le es inherente por mandato constitucional y legal y de otra parte, que la misma (la propiedad) haya sido adquirida conforme a la constitución y la ley, por cuanto no es posible desde ningún punto de vista darle legitimidad a un patrimonio que no ha sido adquirido legalmente, o a una propiedad con destinación ilícita.

El control de legalidad fue esbozado por el legislador del año 2.000 como un dispositivo de protección para la persona y su propiedad privada, que son sujetos de medidas precautelarías, con el fin de conjurar actos que atenten contra ella desde una perspectiva formal y material; el instituto tuvo fuente en el artículo 392 de la Ley 600 de 2000, que regentaba:

(..) "Del control de la medida de aseguramiento y de decisiones relativas a la propiedad tenencia o custodia de bienes. La medida de aseguramiento y las decisiones que afecten a la propiedad,

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Código de Extinción de Dominio

Artículo 87. Fines de las medidas cautelares

Al momento de la presentación de la demanda de extinción de dominio, si no se han adoptado medidas cautelares en fase inicial, el Fiscal, mediante providencia independiente y motivada, ordenará las mismas con el fin de evitar que los bienes que se cuestionan puedan ser ocultados, negociados, gravados, distraídos, transferidos o puedan sufrir deterioro, extravío o destrucción; o con el propósito de cesar su uso o destinación ilícita. En todo caso se deberán salvaguardar los derechos de terceros de buena fe exenta de culpa.

El juez especializado en extinción de dominio será el competente para ejercer el control de legalidad sobre las medidas cautelares que se decreten por parte del Fiscal.

posesión, tenencia o custodia de bienes muebles o inmuebles, proferidas por el Fiscal General de la Nación o su delegado podrán ser revisadas en su legalidad formal y material por el correspondiente juez de conocimiento, previa petición motivada del interesado, de su defensor o del Ministerio Público.

Cuando se cuestione la legalidad material de la prueba mínima para asegurar procederá el amparo en los siguientes eventos:

- 1. Cuando se supone o se deja de valorar una o más pruebas.
- 2. Cuando aparezca clara y ostensiblemente demostrado que se distorsionó su contenido o la inferencia lógica en la construcción del indicio, o se desconocieron las reglas de la sana crítica.
- 3. Cuando es practicada o aportada al proceso con desconocimiento de algún requisito condicionante de su validez.

Quien solicite el control de legalidad, con fundamento en las anteriores causales debe señalar claramente los hechos en que se funda y demostrar que objetivamente se incurrió en ella.

Reconocido el error sólo procederá el control cuando desaparezca la prueba mínima para asegurar.

La presentación de la solicitud y su trámite, no suspenden el cumplimiento de la providencia ni el curso de la actuación procesal.

Si se trata de una decisión sobre bienes que no se origina en una providencia motivada, el control de legalidad podrá ejercerse de inmediato. Se exceptúan de la anterior disposición aquellos bienes que se encuentren fuera del comercio o que por su naturaleza deban ser destruidos."

De ese modo, dentro de las novedades contenidas en la Ley 1708 de 2014, como se dijo en precedencia en el apartado de fundamentos legales y consideraciones del despacho, que se encuentra la creación de dos clases de verificaciones judiciales formales a las actividades desplegadas en el estanco de indagación, así: i.) al archivo, y ii.) el examen a la imposición de medidas cautelares con las que se restringe el libre tráfico de bienes respecto de los cuales se infiere la posible concurrencia de una causal de extinción de dominio, para garantizar la efectividad de la acción extintiva; las cautelas se encuentran previstas en la Ley<sup>29</sup> y se encuentran orientadas a asegurar que la decisiones judiciales que

16

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Código de Extinción de Dominio -Ley 1708 del 20 de enero de 2.014. Código de Extinción de Dominio- Artículo 88. **Clases de medidas cautelares** 

pongan fin a los procesos sean materialmente ejecutadas, pero además, garantizan que el público y conglomerado social en general conozca de la existencia del trámite y se abstenga de realizar la tradición o cualquier tipo de negociación o acto jurídico de los bienes afectados.

## 4.3.1. Control de legalidad sobre las medidas cautelares impuestas al inmueble identificado con M.I. 01N-101472.

La causal prevista en el numeral 1° del artículo 112 del Código de Extinción de Dominio, le refiere al operador jurídico que debe declarar la ilegalidad de las medidas cautelares "cuando no existan los elementos mínimos de juicio suficientes para considerar que probablemente los bienes afectados con la medida tengan vínculo con alguna causal de extinción de dominio".

De entrada, se observa que lo primero que exige la norma es la existencia de elementos mínimos de juicio, so pena de que se declare la ilegalidad de la decisión de imponer medidas cautelares por no haberse cumplido con el deber, que como manifestación del principio del debido proceso tienen las autoridades, de motivar <u>fundadamente</u> las decisiones que afecten otros derechos fundamentales; quebrantando de paso la regla del artículo 89 del Código de Extinción de Dominio, que indica que el decreto de las medidas cautelares debe atender bien a un caso de urgencia manifiesta, o bien, a "serios motivos fundados"

.....

Aquellos bienes sobre los que existan elementos de juicio suficientes que permiten considerar su probable vínculo con alguna causal de extinción de dominio, serán objeto de la medida cautelar de suspensión del poder dispositivo.

Adicionalmente, de considerarse razonables y necesarias, se podrán decretar las siguientes medidas cautelares:

<sup>1.</sup> Embargo.

<sup>2.</sup> Secuestro.

<sup>3.</sup> Toma de posesión de bienes, haberes y negocios de sociedades, establecimientos de comercio o unidades de explotación económica.

PARÁGRAFO 10. La medida cautelar de suspensión del poder dispositivo se inscribirá de inmediato en el registro que corresponda, sin ser sometidas a turno o restricción por parte de la entidad respectiva y sin consideración a la persona que alega ser titular del bien, dado el carácter real\*(patrimonial) de la presente acción. Tratándose de bienes muebles o derechos, se informará a las instituciones correspondientes sobre la medida a través de un oficio, si a ello hubiere lugar.

que permitan considerar la medida como indispensable y necesaria para cumplir alguno de los fines descritos en el artículo 87 de la presente ley<sup>30</sup>.

En este caso, sí hay algunos elementos mínimos de juicio que pueden soportar la existencia del vínculo probable entre el bien y la causal primera de extinción de dominio, cuales son el informe de investigador de campo de la fecha 21-02-2022<sup>31</sup>, el informe de investigador de campo de la fecha 04-03-2022<sup>32</sup>, la orden de allanamiento y registro con su correspondiente informe ejecutivo<sup>33</sup> y los informes de las interceptaciones a comunicaciones que recayeron sobre las líneas pertenecientes a Jhojan Andrey Úsuga Graciano, a José Albeiro Gómez alias "Chepe" y a Dora Patricia Uribe Zapata, y también la fuente no formal recogida en el informe de policía de fecha 18-02-2022<sup>34</sup>.

Por lo cual no asiste razón al incidentista en afirmar que "la Delegada de la Fiscalía, no arribó los elementos mínimos de juicio que con probabilidad de verdad demuestren la concurrencia de alguna de las causales prevista en la ley (...)", ya que, si se procediera a realizar la valoración ordenada y conjunta de los elementos de juicio obrantes en el plenario, se encontraría el vínculo probable que emerge de los mismos.

Entonces encuentra este Despacho Judicial, que existen unos elementos mínimos de juicio, con base en los cuales se puede estudiar los serios motivos fundados que tuvo la Fiscalía, para establecer el vínculo probable con una causal de extinción de domino. Pero antes de ello, se le reprochará al Despacho Fiscal la consignación de un desatino en la motivación de su resolución, cual destacó

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Subrayado del Despacho.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Informe suscrito por los servidores de policía judicial, investigadores criminales SI Víctor Fabián López Higuita, y SI Miguel Augusto Mendoza. Se puede encontrar en el cuaderno veintitrés de la etapa investigativa de la Fiscalía, entre las páginas 117 y 422.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Informe suscrito por el investigador criminal SI Víctor Fabián López Higuita. Se puede encontrar en el cuaderno veintitrés de la Fiscalía, entre las páginas 497 y 524.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Informe ejecutivo de fecha 24-03-2022 y suscrito por los investigadores criminales, SI Iván Moisés Gómez Bolaños, y PT Camilo Iamus Hernández. Se encuentran en el cuaderno veinticuatro de la Fiscalía entre las páginas 337 a 361.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Informe de policía suscrito por el servidor de policía DIJIN Francisco Javier Morales Molina. Se observa en el cuaderno veintitrés de la Fiscalía, en las páginas 63 a 66.

el incidentista, toda vez que equivocadamente afirmó la Fiscalía que el señor Jorge Alcónides Úsuga Carmona figura afiliado al sistema general de seguridad social en salud, en calidad de <u>beneficiario</u>; en efecto, aunque el Despacho Fiscal tampoco tuvo el método de especificar y dirigir al elemento de juicio pertinente para sostener su argumento, de todas maneras sí se encontró el informe de investigador de campo de la fecha 21-02-2022<sup>35</sup>, el cual en la página 328 reporta el mismo error que cometió la Delegada: a pesar de tener copia de la consulta en el ADRES acerca del señor Úsuga Carmona, donde dice que éste se encuentra afiliado a la EPS Suramericana S.A., dentro del régimen contributivo y tipo de afiliado <u>cotizante</u>, inmediatamente el investigador consignó equivocadamente que el tipo de afiliación del señor es como <u>beneficiario</u>.

Si bien no se trata de un error de gravedad como para desvirtuar el probable vínculo de que habla el articulado normativo, que se sostiene por medio de otros elementos de juicio, sí destaca la inatención que tuvo el Despacho Fiscal en relación con el estudio y el análisis del recaudo probatorio, labor que propiamente le incumbía. Además, que resalta por ser el argumento de apertura de las motivaciones respecto de este bien en particular.

Continuando, para construir la inferencia lógica se debe partir de la fuente no formal, que si bien por sí misma no es un elemento que pueda servir de prueba, es el medio a través del cual arribaron las autoridades al conocimiento sobre la probable conexión entre el inmueble ubicado en la carrera 78B #57-19, barrio Los Colores de la ciudad de Medellín, y la investigación desarrollada contra el patrimonio de los miembros del grupo liderado por Miguel Ángel Úsuga Fernández, grupo encargado del lavado de activos relacionados con el GAO Clan del Golfo.

Mientras que, a partir de los demás elementos de juicio, se captan las razones que refuerzan el vínculo probable entre el bien y la causal primera de extinción de dominio, toda vez que demuestran una probable relación entre los miembros

\_

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Informe suscrito por los servidores de policía judicial, investigadores criminales SI Víctor Fabián López Higuita, y SI Miguel Augusto Mendoza. Se puede encontrar en el cuaderno veintitrés de la etapa investigativa de la Fiscalía, entre las páginas 117 y 422.

del grupo dedicado al lavado de activos, con el inmueble del señor Úsuga Carmona. Las interceptaciones a las líneas telefónicas dan cuenta, en primer lugar, acerca de la existencia de varios predios en el sector de Los Colores de la ciudad de Medellín, destacándose la referencia a "las dos casas", que menciona Jhojan Andrey Úsuga Graciano en una conversación con su señora madre, Carmen Cecilia Graciano Loaiza, dentro del contexto de un posible divorcio y la entonces partición de los bienes que Miguel Ángel Úsuga Fernández tenía a nombre de terceros.

Y, se van concretando aquellas menciones superfluas, en una probable relación con el inmueble del señor Úsuga Carmona, porque en las interceptaciones de comunicaciones, tanto Jhojan Andrey Úsuga Graciano, como otros integrantes del grupo delincuencial hicieron mención expresa al inmueble ubicado en la dirección carrera 78B #57-19 en el marco de varias operaciones mercantiles y administrativas. Relación que ya queda palpable, gracias a los resultados de la diligencia de allanamiento y registro a dicho inmueble, durante la cual se capturó al señor Jhojan Andrey Úsuga Graciano, miembro del grupo delincuencial de Miguel Úsuga y sobre quien recaía orden de captura, además del hallazgo de elemento material con vocación probatoria, consistente en equipos de comunicaciones y documentación consistente en comprobantes de consignaciones, facturas de ventas y otros.

Por lo tanto, la inferencia lógica de la Fiscalía no ha sucumbido ante los señalamientos del incidentista, y se acaba de exponer que el soporte probatorio existente representa la ilación probable con una causal de extinción de dominio. Así es como ha entendido ésta causal de ilegalidad el honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá –Sala de Decisión de Extinción de Dominio-:

(...) lo que se hace es el contraste de la argumentación empleada por la Fiscalía General de la Nación para fijar los gravámenes y la existencia del soporte con el que dice que cuenta, pero no su contenido propiamente; entonces la verificación formal y material no gira en torno a la certidumbre de la existencia de los trastornos que dan origen a la acción, porque se ausculta en el posible vínculo con una causal extintiva de dominio, por consiguiente la tarea del incidentante consiste en demoler la inferencia lógica que

enfrenta, porque no es posible llegar a la misma conclusión con los elementos propuestos  $(...)^{36}$ .

Prosiguiendo con la segunda causal del artículo 112 del Código de Extinción de Dominio, ésta le advierte al juez del control de legalidad que debe declarar la ilegalidad de las medidas cautelares cuando, sometidas al test de proporcionalidad, no se advierta que las mismas atiendan al cumplimiento de sus fines.

De entrada, cabe anotar que el artículo 88 indica que es necesario que sobre un bien "existan elementos de juicio suficientes que permiten considerar su probable vínculo con alguna causal de extinción de dominio", como para que el mismo pueda ser sometido a la medida cautelar de suspensión del poder dispositivo. Tema que ya no amerita una nueva discusión porque en los párrafos anteriores ya se demostró la existencia del vínculo probable y que, por tanto, derivará en la declaración de la legalidad formal y material de la medida cautelar de suspensión del poder dispositivo que recayó sobre el inmueble identificado con M.I. 01N-101472.

Pero comparte este Despacho Judicial, el argumento de que realmente no se presentan los elementos de juicio para inferir razonablemente que exista un "rol de colaborador cercano de la organización criminal liderada por Miguel Ángel Úsuga Fernández", aspecto que resulta de relevancia para determinarse la necesidad y la proporcionalidad de las medidas cautelares de embargo y secuestro.

En efecto, si se estudian las motivaciones expuestas por el Despacho Fiscal a partir de los resultados investigativos, cualquier analizador llegaría a la conclusión irremediable que, el señor Jorge Alcónides Úsuga Carmona, en ningún punto del programa metodológico expuesto por la Fiscalía fue investigado, ni patrimonialmente ni como posible miembro de la organización criminal a cargo de Miguel Ángel Úsuga Fernández, organización estructurada para el lavado de activos asociados al GAO Clan del Golfo<sup>37</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Proceso 05000 31 20 002 2021-00017 01, M.P. William Salamanca Daza.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Explica el incidentista: "(...) tampoco en el estudio patrimonial referido por Fiscalía en citada Resolución, se concluye que los bienes de mi prohijado hayan sido adquiridos con dineros de ilícita procedencia (...), por

Lo anterior, porque se destaca que el Despacho Fiscal, si bien logró demostrar un vínculo probable del bien con los fines investigativos que buscan la declaratoria de la extinción del derecho de dominio, no logró trabar el conflicto entre el derecho de propiedad del señor Jorge Alcónides Úsuga Carmona con los fines perseguidos por las medidas cautelares.

Bien, si la Fiscalía pretendiera argumentar que las medidas extraordinarias son adecuadas para que los derechos patrimoniales no sigan siendo "foco de administración alguna por los titulares aparentes que figuran en los respectivos registros", o que haya "terceras personas quienes prestan sus nombres para que los bienes figuren en cabeza suya", entonces la fundamentación debe presentarse por medio de elementos de juicio que permitan considerar que, realmente, Jorge Alcónides Úsuga Carmona es uno de aquellos "titulares aparentes" que están vinculados con la actividad de lavado de activos, por medio de una investigación que permita establecer que entre Jorge Alcónides y Miguel Ángel Úsuga existían acuerdos más allá de lo que podrían aparentar ser simples relaciones comerciales o de vecindad.

Para ello, se podría considerar que la Fiscalía afirma que "Miguel Úsuga, realizó la compra de los 2 inmuebles y los unió físicamente" y que, de los extractos de los resultados de las interceptaciones de comunicaciones, los cuales adjunta el Despacho Fiscal como fundamento de las motivaciones de la resolución de medidas cautelares, se desprenden dos aseveraciones: la primera, que la casa le pertenece al investigado Úsuga Fernández a pesar de estar a nombre de otra persona, y la segunda, que "por instrucciones de Miguel Úsuga, la vivienda es utilizada por José Gómez, alias Chepe, para el acopio de elementos logísticos y parqueo de vehículos de la organización".

Argumentos que pueden dar cuenta de una real posibilidad de disposición física del bien por parte del grupo delincuencial, tal como aduce en el "juicio de urgencia" de la resolución de medidas cautelares.

falta de nexo causal entre la propiedad de mi representado con las actividades ilícitas desplegadas por Miguel Ángel Úsuga Fernández".

Se le debe reconocer a la Fiscalía que existe una posibilidad de que exista un acuerdo para que el señor Jorge Alcónides sea "titular aparente" del inmueble que figura a su nombre. Así que, de los extractos de las líneas pertenecientes a Jhojan Andrey Úsuga Graciano, a José Albeiro Gómez alias "Chepe" y a Dora Patricia Uribe Zapata, lo que se desprende es que el inmueble ubicado en la carrera 78B #57-19, objeto de la pretensión extintiva, fue mencionado para distintas operaciones comerciales y administrativas como domicilio de aquellos, pero no dejan evidenciar directamente la relación del señor Jorge Alcónides Úsuga Carmona con la actividad de lavado de activos o cualquier otra del grupo delictivo.

Mientras lo que respecta, al extracto de la línea perteneciente a Carmen Cecilia Graciano Loaiza, no se logra inferir que entre aquellos bienes respecto de los cuales se afirma que pertenecen al señor Miguel Ángel Úsuga Fernández, pero que los tiene a nombre de terceros, se encuentre el inmueble del señor Úsuga Carmona; ni siquiera por la referencia que hace esta señora durante una llamada a un terreno sometido a sucesión y a hipoteca, toda vez que para la época de ésta comunicación, que se indica que se realizó en la fecha 05-12-2020, el inmueble identificado con M.I. 01N-101472 no tenía ninguna anotación vigente sobre gravámenes de hipoteca y la sucesión se había adjudicado desde hace varios años<sup>38</sup>.

La causal de ilegalidad de las medidas cautelares extraordinarias, como se trata de las medidas más lesivas del derecho de propiedad, determina que su materialización debe mostrarse como proporcional para el cumplimiento de sus fines, resultando evidente que, para someterse dos derechos en un conflicto a través del test de proporcionalidad, primero debió determinarse cómo el derecho de propiedad del señor Jorge Alcónides Úsuga Carmona no atendió a la función social y ecológica, como principio constitucional, para proceder a descalificarlo y que quede eminentemente sometido a los fines de las medidas cautelares, dentro de la acción constitucional de extinción de dominio.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Según se desprende de las anotaciones del certificado de libertad y tradición.

La mera prueba de la utilización como sitio de habitación por parte de miembros del grupo delictivo del cual es cabecilla el señor Miguel Ángel Úsuga Fernández, sin que se haya investigado que el titular del derecho de dominio perteneciera o participara de la "estructura financiera compleja del crimen organizado", no tolera el argumento de que las medidas extraordinarias sean proporcionales en su limitación al derecho de propiedad, ya que mientras la suspensión del poder dispositivo requiere tan solo un vínculo probable entre el bien y la causal de extinción de dominio, este tipo de medidas demanda un juicio de razonabilidad y necesidad para el cumplimiento de unos fines y, en este caso concreto, no aportó la Fiscalía elementos que soporten que necesariamente el derecho de propiedad seguirá estando materialmente vinculado con actividades ilícitas.

Tampoco se soporta el juicio de necesidad, en el argumento de que las medidas extraordinarias son indispensables para evitar que se genere beneficio alguno para un grupo armado organizado por medio del lavado de activos, o para evitar que "los bienes (...) puedan sufrir deterioro, extravío o destrucción; o con el propósito de cesar su uso o destinación ilícita", mientras no se conecte de manera clara el ejercicio del derecho de dominio con dichas actividades ilícitas. Obsérvese que, éste fue el argumento angular del Despacho Fiscal para justificar la razonabilidad y necesidad de las medidas cautelares extraordinarias:

Todo el anterior andamiaje a la luz del JUICIO DE ADECUACIÓN implica que no existen otro tipo de medidas en el orden jurídico para cesar el uso, goce y disposición de los bienes de la presunta Organización Criminal que lidera MIGUEL ÁNGEL ÚSUGA FERNÁNDEZ y de la que al parecer hacen parte los miembros de su núcleo familiar y colaboradores más cercanos.

(...)

Por ello, el juicio valorativo en el presente caso se inclina por la imposición de las medidas cautelares contenidas en el artículo 88 del C.E.D., dado que la propiedad de cada bien reseñado, tiene una relación directa con actividades ilícitas y está de por medio un GRUPO DELICTIVO ORGANIZADO (...)

Mientras que sí es indispensable la medida de suspensión del poder dispositivo para evitar que los bienes "que se cuestionan puedan ser ocultados, negociados, gravados, distraídos, transferidos (...)" y se garantice la justicia materialmente efectiva.

Este Despacho Judicial acoge la razón del incidentista que "resulta suficiente la suspensión del poder dispositivo", no por sus argumentos<sup>39</sup>, sino porque la misma es suficiente para garantizar los resultados del proceso de extinción de dominio y, en consecuencia de todo lo anterior, se declarará la ilegalidad de las medidas cautelares de embargo y secuestro practicadas sobre el bien inmueble plenamente identificado en el capítulo 2.3 de esta providencia.

## 4.3.2. Control de legalidad sobre las medidas cautelares impuestas sobre el vehículo de placas DHQ-553.

Nuevamente, la causal prevista en el numeral 1° del artículo 112 del Código de Extinción de Dominio, le refiere al operador jurídico que debe declarar la ilegalidad de las medidas cautelares "cuando no existan los elementos mínimos de juicio suficientes para considerar que probablemente los bienes afectados con la medida tengan vínculo con alguna causal de extinción de dominio".

Pero en este caso, se observa que la argumentación del incidentista, para solicitar la declaratoria de ilegalidad de las medidas cautelares que recaen sobre el automotor, se restringen en su mayor parte a pregonar en varios apartados sueltos y desordenados que la motivación de la Fiscalía "no destruye la presunción de buena fe exenta de culpa con las que actuó mi mandante al adquirir la camioneta (...) placa DHQ-553", que "ha tratado de mantenerlo en buen estado, después de la compra (...) porque era destinado para la movilidad de su familia (...)", y que "el señor JORGE ALCÓNIDES ÚSUGA CARMONA es un comprador de buena fe exenta de culpa, toda vez

\_

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Observa que "no existe elemento mínimo de juicio para considerar que mi prohijado desplegaría algún negocio jurídico con miras a ocultarlo (...)", y que "ni allegó pruebas que demuestren (...) que los bienes de mi prohijado puedan estar amenazados o alterados, puesto que no se evidencia que estuvieran abandonados (...)". O aquel argumento que parece apelar a la misericordia, que niega "(...) que mi defendido hubiera mostrado comportamientos agresivos (...) cuando se enteró por actos propios de la materialización de las medidas cautelares (...)".

que cumplió con la debida diligencia y cuidado realizando los actos previos de verificación (...)".

Por lo cual es necesario retirar estos puntos de disentimiento del incidentista, de cara a la lógica jurídica de las medidas cautelares, toda vez que yerra en pretender discutir los méritos de la procedencia de la causal extintiva en esta sede meramente incidental<sup>40</sup>, así como esgrimir el argumento de la buena fe exenta de culpa<sup>41</sup>, y mucho menos pretender discutir acerca de las condiciones personales<sup>42</sup> o la capacidad adquisitiva del señor Jorge Alcónides<sup>43</sup>; porque todos son argumentos destinados a una teoría defensiva contra la causal de extinción de dominio, que no es lo mismo que argumentar las causales de ilegalidad de las medidas cautelares. La Honorable Sala de Decisión de Extinción de Dominio –Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá-, siempre se ha pronunciado en el sentido de explicar que:

insístase, en el incidente no se revisan pruebas para establecer si existe o no mérito para extinguir el dominio, como tampoco se pondera si la imposición de medidas cautelares se justifica bajo el supuesto de la certeza merced del valor de convicción de los medios suasorios<sup>44</sup>.

Por lo tanto, una vez apartados aquellos argumentos del incidentista, que no avizoró las consecuencias negativas de no atender a la lógica jurídica propia para argumentar la solicitud de declaratoria de ilegalidad de las medidas cautelares, cabe indicar que no se hayan más señalamientos que se encuentren

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> "(...) las medidas cautelares decretadas no son proporcionales, ni necesarias y, menos, resultan ser útiles debido al incumplimiento de [la primera causal de ilegalidad], por lo consiguiente, no se puede inferir que los bienes (...) son producto de actividades ilícitas y menos aún que han sido objeto de mezcla (...)".

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> "por el contrario si ha propendido por dar cumplimiento a la función social y ecológica de su propiedad lo mismo al negocio jurídico relacionado con la adquisición del inmueble donde procedió de manera diligente y prudente exenta de toda culpa (...)". O "desconocía que el señor Miguel Ángel Úsuga Fernández estaba siendo investigado y menos aún que estaba inmerso en actividades ilícitas. Máxime que el negocio jurídico, lo realizó por la misma confianza entregada por el señor Humberto Castaño Úsuga, alcalde de Buriticá (...)".

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> "el señor JORGE ALCÓNIDES ÚSUGA CARMONA, es un líder social, profesional independiente y una figura pública (...)".

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> "mi cliente merece el trato de tercero de buena fe exento de culpa, dado que su negociación más exactamente, en la adquisición del vehículo tantas veces mencionado, se ha dado por su capacidad económica de adquisición, sino que también se ha demostrado su liquidez para el momento de la misma (...)".

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Proceso 05000 31 20 002 2021-00017 01, M.P. William Salamanca Daza.

dirigidos a desvirtuar el vínculo probable entre el vehículo de placas DHQ-553 y la causal de extinción de dominio por el origen ilícito.

Así que el vínculo probable entre el vehículo DHQ-553 con la causal extintiva se mantiene incólume, por cuanto el mismo se fundamenta en que el vehículo fue adquirido en el año 2015 por parte del señor Miguel Ángel Úsuga Fernández, año respecto del cual los peritos encargados del análisis contable, financiero y patrimonial concluyen que no hay soportes que permitan identificar el origen de los recursos de Miguel Ángel, mientras que la información suministrada por el sistema financiero soportó el peritaje para arribar a la afirmación de que esta persona presenta un incremento patrimonial por justificar de doscientos veintiún millones veintitrés mil quinientos veintiocho pesos (\$ 221.023.528)<sup>45</sup>.

De las labores adelantadas por la Fiscalía de la Dirección Especializado Contra Organizaciones Criminales, especialmente las interceptaciones comunicaciones, permiten entrever la conexidad entre Miguel Ángel Úsuga Fernández con el GAO Clan del Golfo y se observa, cómo se realizan varios acuerdos para recibir dineros y darle visos de legalidad a través de varios movimientos dentro del sistema financiero, por medio de sociedades y a través de terceras personas que hicieron de testaferros. Motivos suficientes para creer que el incremento patrimonial que no se puede justificar en una fuente legal, tiene por origen las actividades ilícitas que general grandes beneficios lucrativos a los grupos criminales y, por tanto, como en ese mismo año fue que esta persona adquirió el vehículo de placas DHQ-553, se puede concluir que probablemente éste bien es producto indirecto de la realización de actividades ilícitas.

Pero como la forma de distraer los recursos de fuente ilícitas o, en otras palabras, de lavar activos ilícitamente obtenidos, es confundir su origen entre varias

\_

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Analícese el resumen de los análisis contable, financiero y patrimonial que realiza la Delegada Fiscal en la resolución de medidas cautelares, cuando empieza a referir la motivación para someter tantos haberes del patrimonio de "1.Miguel Ángel Úsuga Fernández C.C. No.71.250.955 alias "Compa o Muela de Grillo".

operaciones comerciales, financieras y bursátiles, en el año 2016 sería vendido el vehículo de placas DHQ-553 al señor Jorge Alcónides Úsuga Carmona.

Como se ve, la razonabilidad del vínculo del bien con la causal extintiva no depende de la coparticipación del señor Jorge Alcónides con actividades ilícitas, ni mucho menos en que "haya destinado su camioneta de placa DHQ-553 para la comisión de delitos", que ni siquiera se trata de la causal invocada para pretender el vehículo dentro de la presente acción de extinción de dominio.

Por otro lado, para ir entrando en la consideración del segundo numeral del artículo 112 CED, se debe observas antes que el artículo 88 indica que es necesario que sobre un bien "existan elementos de juicio suficientes que permiten considerar su probable vínculo con alguna causal de extinción de dominio", como para que el mismo pueda ser sometido a la medida cautelar de suspensión del poder dispositivo; tema que ya no amerita una nueva discusión porque en los párrafos anteriores ya se demostró la existencia del vínculo probable.

Mientras que, por tratarse de un bien mueble, resulta más destacable que le asiste razón a la Fiscalía cuando argumenta que las medidas físicamente restrictivas impiden cualquier alteración sobreviniente del estado del bien, que pueda impedir la realización efectiva de los resultados del proceso de extinción de dominio.

Se observa, que el Despacho Fiscal alega que las medidas de embargo y secuestro son necesarias "a efectos de que los derechos patrimoniales que se pretenden o que se encuentran cuestionados no puedan ser ocultados, negociados, gravados, distraídos, transferidos o puedan sufrir deterioro, extravío o destrucción"; evidentemente, porque del derecho al uso y goce de un vehículo automotor resulta implícito que el mismo se ejerce mediante el desplazamiento que facilita el propio bien, explotándolo, recibiendo rendimientos y aquel constante cambio de ubicación es lo que facilita su ocultamiento en cualquier garaje o rincón del territorio.

Argumento que atiende a la teleología de las cautelas dentro del proceso extintivo, atiende a su propósito de cara al futuro resultado del proceso de extinción de dominio y a los eventos que puedan surgir en el camino con

potencialidad de obstaculizar el trámite o sus resultados; muy contrario al argumento del incidentista, quien erróneamente quiere hacer creer que la razonabilidad o necesidad de las medidas depende de que se demuestre en el momento "la intención de [su] representado en pretender vender o transferirlos (...). Así como (...) que el vehículo pueda ser destruido, ocultado, abandonado o descuidado, [porque] al contrario, [su] prohijado ha tratado de mantenerlo funcionando mecánicamente".

Y, son proporcionales, porque en este caso la Delegada Fiscal sí cuenta con argumentos sólidos para hacer destacar que, con mucha probabilidad, el derecho de propiedad en su origen no ha atendido a los fines sociales a que obliga la norma de grado constitucional. Y al quedar brevemente descalificada la protección que otorga el ordenamiento jurídico al derecho de propiedad, la Fiscalía ha argumentado y motivado una justificación sobre necesidad y razonabilidad "en razón a que cada bien descrito ha vulnerado la propiedad legítima por origen, ello conlleva a la aplicación de la extinción del derecho de dominio", y en que la acción constitucional

(...) en el proceso de extinción de dominio debe garantizarse la ejecución de la decisión que le ponga fin, y para ello, con el propósito de garantizar que los bienes existan hasta finalizar el proceso la Ley permite a la Fiscalía la imposición de medidas cautelares, sin que ello implique que se haya extinguido el derecho de dominio, en razón de gozar de ser provisionales hasta la decisión definitiva que será adoptada por un Juez competente.

Todo de lo cual, se concluye que en este caso se debe declarar la legalidad formal y material de las medidas cautelares, tanto de la medida cautelar consistente en la suspensión del poder dispositivo, como de las medidas de embargo y secuestro sobre el vehículo de placas DHQ-553.

## 5. DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO DE ANTIOQUIA,

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO.** Declarar la <u>ilegalidad</u> de las medidas cautelares de embargo y secuestro que recaen sobre el bien inmueble identificado con folio de matrícula nro. **01N-101472**, según lo explicado en el capítulo 4.3.1 de esta providencia.

**SEGUNDO.** Declarar la <u>legalidad</u> formal y material de la medida cautelar consistente en la suspensión del poder dispositivo que actualmente soporta el bien inmueble identificado con folio de matrícula nro. **01N-101472**, según lo motivado en el capítulo 4.3.1 de esta providencia.

**TERCERO.** Desestimar las demás pretensiones de control de legalidad invocadas en el presente incidente, conforme a lo motivado en el capítulo 4.3.2 de esta providencia.

CUARTO. Consecuencia de lo anterior, se declara la legalidad formal y material de las decisiones emitidas por la Fiscalía 35 de la Dirección Especializada en Extinción del Derecho de Dominio, mediante las cuales realizó las medidas cautelares que recayeron sobre el automotor identificado con las placas DHQ-553.

**QUINTO.** Informar que contra esta decisión procede el recurso de apelación ante el honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá –Sala de Decisión de Extinción de Dominio-.

**SEXTO.** Una vez en firme la presente providencia, mediante la Secretaría del Juzgado, se librarán las comunicaciones de rigor. con el fin de dar cumplimiento al numeral primero de la parte resolutiva.

**SÉPTIMO.** De conformidad al Acuerdo CSJANTA20-99 del 02 de septiembre de 2020, la Ley 2213 de 2022 y los artículos 44 y 54 del CED, se ordena la notificación de la presente providencia mediante estados electrónicos, junto con la publicación de una copia de esta providencia en el micrositio web del Juzgado, dispuesto para tales fines dentro del portal de Internet de la Rama Judicial. También, háganse las respectivas anotaciones de la presente actuación en el Sistema de Gestión Siglo XXI.

## NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

## JOSÉ VÍCTOR ALDANA ORTIZ

#### **JUEZ**

## JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE ANTIOQUIA

Se notifica el presente auto por ESTADOS Nº 038

Fijado hoy en la secretaría a las 08:00 AM.

Desfijado en la misma fecha a las 05:00 PM.

Medellín, 13 de junio de 2023

#### **LORENA AREIZA MORENO**

Secretaría

Firmado Por:

Jose Victor Aldana Ortiz

#### Juez

# Juzgado De Circuito Penal 002 De Extinción De Dominio Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **14f2beaca98faf52924094e701116c6ed4442562b453b04d0ed88117aab1d795**Documento generado en 13/06/2023 10:25:47 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica